

Sagunto: Un reto al Gobierno

La huelga general de Sagunto supone la comprobación de lo que ya se veía venir en Gijón y seguramente se confirmará en otras: que las ciudades que viven de las industrias siderúrgicas subvencionadas pueden lanzarse a una competición publicitaria para impedir el cierre parcial de factorías, minas o altos hornos que no producen mayor beneficio que el de justificar la nómina de sus trabajadores.

El problema moral y político del Gobierno es éste: si un puesto de trabajo en Sagunto cuesta tres veces más que en cualquier otro lugar de España, ¿debemos despedir a un obrero para rescatar del paro a dos? En pura teoría económica la respuesta es, obviamente, afirmativa. Pero cuando se plantean los problemas humanos y sociales de los afectados, pocos son los gobernantes que se atreven a arrostrar esa impopularidad.

El ejemplo de debilidad del último Gobierno de UCD transigiendo con las presiones económicamente desorbitadas en Nervacero, Intelhorce, Potasas de Navarra o Presur es catastrófico, porque a largo plazo supone una concesión demagógica que perjudica a más gente de la que beneficia.

La siderurgia española necesita de una reestructuración eficaz, concebida como un plan de conjunto, no como sucesión de parches. El ministro Solchaga debería, pues, acelerar su plan de conjunto para reformar el sector. Hay que hacer sacrificios hoy si queremos trabajo para mañana. Pero eso hay que explicarlo a los directamente afectados y a los que, mediante sus impuestos, les pagan el sueldo.